

Doctor

OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA:	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
PROCESO:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-014-2023-00101-00
DEMANDANTE:	DANIELA RAMÍREZ HURTADO Y OTROS
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
LLAMADA EN GARANTÍA:	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, conforme se acredita con la escritura pública adjunta que contiene el poder de representación, encontrándome dentro del término legal procedo en primer lugar a CONTESTAR LA DEMANDA impetrada por **DANIELA RAMÍREZ HURTADO Y OTROS** en contra del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, y en segundo lugar a CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado por este ente territorial a mi representada, en virtud de la **Póliza de Responsabilidad Civil Nro. 420-80-994000000181 certificado 1**, cuya vigencia corrió entre el 23 de junio de 2020 y el 19 de mayo de 2021; para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, así como las que contiene el llamamiento en garantía que nos ocupa, en los siguientes términos:

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

El despacho mediante Auto No. 229 del 25 de mayo de 2023 resolvió admitir la demanda de reparación directa. Por su parte el llamamiento en garantía fue admitido por el despacho mediante Auto No. 16 del 06 de febrero de 2025, notificado por estado el 06 de febrero de 2025 y personalmente el 13 de febrero de 2025, motivo por el que es correcto afirmar que nos encontramos en término para contestar la demanda y el llamamiento en garantía, atendiendo a que el artículo 225 del CPACA establece que la llamada en garantía cuenta con quince (15) días para contestar la demanda y el escrito del llamamiento en garantía, término que se comienza a contabilizar tras dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del correo electrónico de la notificación personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 199 y 205 del CPACA¹. En el caso concreto, el término se computa de la siguiente manera: (i) de la notificación electrónica los días 14 y 17² de febrero de 2025; (ii) traslado del llamamiento, iniciando el 18 de febrero de 2025 y continuando los días 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero, 3, 4, 5, 6, 7 y finalizando el lunes 10 de marzo de 2025. Por lo anterior, es correcto afirmar que este escrito se presenta dentro del término procesal previsto.

¹ Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: (...) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

² Los días sábado 15 y domingo 16 de febrero no son días hábiles por lo que no son objeto del conteo

CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO PRIMERO: Este punto se compone de dos diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si para la fecha indicada la señora Ramírez Hurtado tenía la edad que se refiere, sin embargo, dentro de los anexos de la demanda se observa la existencia de una copia del documento de identidad de la referida, el cual puede confirmar la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si la señora Ramírez Hurtado se desempeñaba como auxiliar contable de la empresa relacionada en el punto, sin embargo, dentro del plenario se observa una certificación expedida por una empresa de idéntico nombre que puede dar sustento a la aseveración, en tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, así como a la validez y veracidad de los documentos acercados para demostrar el punto de la referencia.

En consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: A mi procurada no le consta directa o indirectamente si el 22 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 20:05 horas, la señora Daniela Ramírez Hurtado, se desplazaba en una motocicleta marca AKT, línea AK110 NV, de placa BKZ-87 D; por la Calle 62 con Carrera 1 J del Municipio de Santiago de Cali. En tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso, y en consecuencia le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO TERCERO: No es un hecho que el presunto siniestro se haya presentado a causa del mal estado de la vía, dicha afirmación representa una percepción subjetiva del apoderado de la parte demandante con relación a lo que él considera sucedió o pudo suceder en los hechos relatados en la demanda. Ahora, si bien es cierto existe un Informe Policial de Accidentes de Tránsito, que es en el que se basa la parte demandante para afirmar este punto, el mismo no es una prueba que acredite las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues como se evidencia de su contenido en el expediente, éste fue diligenciado por un agente que no fue testigo presencial del accidente, simplemente diligenció el informe atendiendo lo visto en el sitio 45 minutos después de lo ocurrido, por lo que es claro que no pudo apreciar si el accidente se presentó por algún hecho que sólo puede ser advertible al momento del suceso, como puede ser una imprudencia de la conductora o por alguna falla en el vehículo, solamente se hace referencia a lo que se pudo advertir de manera abstracta sin el contexto de la situación y las variables que pudieron incrementar el riesgo en el hecho ya peligroso de la conducción de un vehículo.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024, ha referido que:

*Es importante precisar que las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este*³. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Frente al carácter probatorio del Informe Policial de Accidente de Tránsito, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, tal como se observa a continuación:

*Así entonces, el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño; las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los demandantes pero no el nexo causal*⁴. (Subrayado y negrillas fuera del texto original).

*En este punto conveniente es precisar, que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración, para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás demandantes*⁵. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En consecuencia, le corresponderá a la togada de la parte actora acreditar todo lo manifestado en

³ Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914).

⁴ Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zoranny Castillo Otolara. Radicación No. 76001333301320140019801.

⁵ Sentencia del 30 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403.

este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO CUARTO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual, me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente si al sitio del presunto accidente de tránsito arribó el señor Gustavo Adolfo Posso en su calidad de agente de tránsito, sin embargo, en el plenario se advierte la existencia de un Informe Policial de Accidentes de Tránsito que puede relacionarse con la presencia del agente en el sitio. No obstante, se debe reiterar lo expuesto en el punto anterior relacionado con el hecho de que el IPAT no configura *per se* una prueba de lo ocurrido por ser una representación de lo inferido por una persona que se presentó al sitio de los hechos con tiempo de diferencia y que no puede dar fe de las circunstancias exactas del accidente.

No es cierto que el Informe Policial de Accidentes de Tránsito que obra en el plenario y que fue suscrito por el agente Posso identificado con placa 192 indique que *“se vislumbra que en la forma que se encuentra es imposible determinar que existía una reparación vial, el deterioro de la carretera genera imposibilidades para el tránsito vehicular”*, tal como lo sugiere la redacción del escrito petitorio, pues se debe señalar que lo mismo corresponde a una apreciación subjetiva que realiza la apoderada de los demandantes, pero se expone de manera conveniente tras la descripción de los datos de identificación del documento público con el fin de generar una conclusión equivocada.

En tal sentido le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO QUINTO: No es un hecho, es una descripción a la que se acompaña la cita de dos normas de tránsito que, en el entendido de la parte accionante, se relacionan con los hechos objeto de la Litis.

FRENTE AL HECHO SEXTO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

No es un hecho que el accidente se haya producido por causa de la omisión de las entidades del estado, ello corresponde a una apreciación subjetiva que realiza la togada de los demandantes, y en consecuencia, le corresponderá a la parte actora acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

A mi procurada no le consta directa ni indirectamente si la señora Ramírez Hurtado sufrió lesiones que afectaron su núcleo familiar, por no ser ello del resorte de las actividades de mi representada, sin embargo, debe dejarse señalado desde ya que no es cierto que se haya visto afectada la capacidad de aporte económico de la afectada, toda vez que como bien se indica en el certificado que se aporta en la demanda expedido por la empresa Cripack S.A.S., el cual obra del 23 de septiembre de 2021, es decir ocho meses después de los presuntos hechos, la señora Ramírez Hurtado devengó su salario y su auxilio de transporte de manera ininterrumpida desde el 10 de

septiembre de 2018, por lo que solicito que tal afirmación se tenga como confesión en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso, a efectos de demostrar que nunca se presentó una pérdida de ingresos a causa de los hechos objeto de debate.

FRENTE AL HECHO SÉPTIMO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si las personas mencionadas en el punto conforman una familia en las condiciones en las que describe, por no ser ello del resorte de las actividades de la compañía de seguros. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, ya que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita advertir acerca de lo referido en este hecho.

FRENTE AL HECHO OCTAVO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si la señora fue trasladada al sitio mencionado y por el personal mencionado en el punto, sin embargo, se debe hacer referencia a que en el plenario obra copia de una historia clínica que puede coincidir con la afirmación. En tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y la validez de los documentos aportados con la demanda. En consecuencia, le corresponderá a los accionantes acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO NOVENO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente lo señalado en este punto, sin embargo, se debe hacer referencia a que en el plenario obra copia de una historia clínica que puede coincidir con la afirmación. En tal sentido nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y la validez de los documentos aportados con la demanda. En consecuencia, le corresponderá a los accionantes acreditar todo lo manifestado en este punto, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DÉCIMO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

No es un hecho, es una descripción que realiza la togada de los peticionarios respecto de las calidades de la vía en que presuntamente se presentó el daño, así como de los responsables de su mantenimiento. En tal sentido le corresponderá a la parte actora acreditar lo descrito en este punto y la relación que ello pueda tener con los hechos objeto de discusión, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

No es un hecho que denote negligencia u omisión por parte de las autoridades por el hecho de que el tramo vial descrito se encuentre bajo su responsabilidad, ello corresponde a una percepción subjetiva y parcializada tendiente a sustentar la teoría de la demanda, en tal sentido, le corresponderá a la parte actora acreditar lo descrito en este punto y la relación que ello pueda tener con los hechos objeto de discusión, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOPRIMERO: Este punto se compone de diferentes aseveraciones, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente el contenido de los escritos a que se hace referencia en el punto, así como tampoco la existencia de las reuniones ahí descritas, sin embargo, se debe mencionar que en el plenario obra copia de documentos que pueden estar relacionados con la información del punto, motivo por el cual nos atemperamos, respecto de la ocurrencia o no de las reuniones, a la validez de las actas aportadas y en consecuencia le corresponderá a la togada de los accionantes acreditar lo descrito y la relación que ello pueda tener con los hechos objeto de discusión, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

No es cierto que los temas que se hayan ventilado en las reuniones a que se refiere el punto reflejen en alguna manera la existencia de una falla en el servicio, y mucho menos que ello se relacione con el accidente que presuntamente sufrió la señora Ramírez Hurtado, toda vez que se está pretendiendo convertir por la apoderada de los demandantes un hecho general como puede ser una reunión entre comunidades y autoridades, con los motivos de un asunto particular como es un accidente de tránsito en donde influyen diferentes variables que son las que determinan la existencia o no de culpabilidad, al menos, en cuanto a lo concerniente con la responsabilidad administrativa de que se trata el asunto de marras. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOSEGUNDO: Se reitera lo antes argumentado, pues se trata de un punto que se compone de diferentes aseveraciones las cuales no comportan el sentido que se les pretende dar, motivo por el cual me pronunciaré de manera independiente.

A mi procurada no le consta directa o indirectamente el contenido de los escritos a que se hace referencia, así como tampoco la existencia de las reuniones ahí descritas, sin embargo, se debe mencionar que en el plenario obra copia de documentos que pueden estar relacionados con la información del punto, motivo por el cual nos atemperamos, respecto de la ocurrencia o no de las reuniones, a la validez de las actas aportadas y en consecuencia le corresponderá a la togada de los accionantes acreditar lo descrito y la relación que ello pueda tener con los hechos objeto de discusión, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo y al igual que en hecho anterior, no es cierto que los temas que se hayan ventilado en las reuniones a que se refiere el punto reflejen en alguna manera la existencia de una falla en el servicio, y mucho menos que ello se relacione con el accidente que presuntamente sufrió la señora Ramírez Hurtado, toda vez que se está pretendiendo convertir por la apoderada de los demandantes un hecho general como puede ser una reunión entre comunidades y autoridades, con los motivos de un asunto particular como es un accidente de tránsito en donde influyen diferentes variables que son las que determinan la existencia o no de culpabilidad, al menos en cuanto a lo concerniente con la responsabilidad administrativa de que se trata el asunto de marras. En este sentido, le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437

de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOTERCERO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente si las personas descritas fueron testigos de los hechos en la calidad en que se hace referencia, motivo por el cual nos atemperamos a lo que su comparecencia en el proceso pueda corroborar respecto de lo ocurrido, así como a la validez y veracidad de los testimonios que ellos puedan brindar y en tal sentido le corresponderá acreditarlo a la parte actora, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011.

FRENTE AL HECHO DECIMOCUARTO: No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza la apoderada de la parte demandante respecto de la presunta conclusión que se debe extraer de sus afirmaciones. En consecuencia, le corresponderá acreditar lo manifestado, de conformidad con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, desde ya se debe manifestar que en el expediente no se visualiza ningún medio de prueba idóneo que permita acreditar lo referido en este hecho.

FRENTE AL HECHO DECIMOQUINTO: A mi prohijada no le consta directa o indirectamente, por no ser del resorte de sus actividades, si en la fecha señalada se llevó a cabo la audiencia de conciliación a que se hace referencia, sin embargo, se debe dejar sentado que en el plenario obra copia de un acta que puede estar relacionada con el aspecto, en tal sentido, nos atemperamos a lo efectivamente probado en el proceso y a la validez y veracidad de los documentos allegados como pruebas y/o anexos a la demanda, relacionados con el punto en cuestión.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer ellas de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. Lo anterior, comoquiera que ni la responsabilidad de mi representada ni la de su asegurada se estructuró, toda vez que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta falla en el servicio, como del daño antijurídico y en especial del nexo de causalidad entre los dos últimos elementos mencionados. En el *sub-lite*, la parte demandante no ha cumplido con ello, lo que inviabiliza la declaratoria de responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, me referiré a cada una de las pretensiones expuestas en el escrito de la demanda, de la siguiente manera:

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la declaración de responsabilidad patrimonial y extracontractual pretendida en razón a que: i) No existe ningún elemento fáctico, jurídico o probatorio que permita establecer que, por parte del Distrito de Santiago de Cali se haya presentado una conducta omisiva, negligente o imprudente que haya ocasionado el daño que aquí nos convoca; ii) La parte actora no ha acreditado que en el sitio de los hechos se haya presentado una falla en la malla vial para el momento de los hechos; iii) Los demandantes no han demostrado eficientemente que la causa determinante del accidente de tránsito aludido haya sido justamente

una anomalía en la malla vial, pues no ha allegado elementos de prueba idóneos, pertinentes y conducentes que permitan determinarlo; iv) La parte actora no ha acreditado, en primera medida, si existe efectivamente una pérdida de capacidad laboral de la víctima y consecuentemente tampoco han demostrado en qué porcentaje se presenta dicha pérdida; v) Los actores tampoco han demostrado que la causa eficiente de la presunta pérdida de capacidad laboral, fue creada o concretada por el ente territorial; y por último vi) Se hace evidente de los elementos probatorios allegados al caso, que el daño que da fundamento a la demanda tuvo como causa un hecho inequívoco, flagrante y determinante producido por la víctima al no atender los deberes de tránsito establecidos en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a cualquier condena en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali o de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** de cancelar a favor de los demandantes cualquier suma de dinero, en razón a que la acción y los medios de prueba en que se fundamenta, no acreditan en ninguna medida la responsabilidad patrimonial y extracontractual de las pasivas.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.2.1. PERJUICIOS MATERIALES – DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y LUCRO CESANTE FUTURO”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, ya que como bien lo indica el apoderado en su escrito petitorio, la solicitud debe tener fundamento en una pérdida de capacidad laboral, en este caso de la joven, y además, debe fundarse en la existencia de una ganancia cierta **que se dejó de percibir** como consecuencia del daño, y propiamente en el daño; pues sin que todo ello en conjunto esté determinado, no es posible atribuir ninguna clase de procedencia de indemnización de este tipo, pues como bien lo explica el Consejo de Estado⁶ *“el lucro cesante hace referencia a la ganancia **que deja de percibirse**, o la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño”*. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este contexto se debe dejar claro que no está demostrado que la señora Daniela Ramírez Hurtado haya tenido una pérdida de capacidad laboral, ergo, la solicitud ya carece del daño que requiere la figura para estructurarse, aunado a ello no está probado que la víctima hubiese dejado de percibir ingresos a causa de los hechos que se alegan en la demanda, motivo por el cual no se adecúa la situación al concepto de lucro cesante, pues como ya se adujo haciendo uso del concepto del Consejo de Estado, sólo se puede hablar de lucro cesante, en la medida en que se trate de una ganancia que haya dejado de percibirse, y ello no se da pues como se observa del certificado laboral acercado al plenario, la demandante continuó trabajando y percibiendo sus ingresos de manera regular hasta después de lo ocurrido.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio, habida cuenta que este debe cumplir las características de todo tipo de daño, esto es, que sea cierto, personal y directo, sin embargo, es evidente que no hay certeza sobre su cuantía, pues como ya se dijo, la parte actora no determinó ni el presunto porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ni el tiempo en que supuestamente dejó de percibir su salario, ni los motivos por los cuales dejó de percibir el salario,

⁶ Sentencia Rad. 00526 de 2016, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez

ni ninguno de los demás rubros a tener en cuenta para su cálculo, este último lo realizó a base de suposiciones y conjeturas, lo que debe llevar indefectiblemente a su negativa.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.2.2. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO”: Sobre el particular debe señalarse que la togada incurre en un error al establecer la fórmula para liquidar el valor relacionado al lucro cesante consolidado, pues para ello hace uso del siguiente criterio:

La fórmula para obtener el valor del lucro cesante futuro, es la siguiente:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses transcurridos desde el momento en que se generó el accidente de tránsito.

1= Es una constante.

Reemplazando tenemos:

$$S = \$1.806.677 \frac{(1+ 0.004867)^{26} - 1}{0,004867}$$

$$S= \$49.945.810$$

Sin embargo, debe tenerse claro que dicha consideración es errónea, pues es el mecanismo para actualizar una indemnización que ya ha sido concedida y que se debe atemperar a un tiempo determinado entre el hecho y el fallo que otorga el derecho, como se explica a continuación:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = indemnización consolidada, es decir, la comprendida entre la fecha del hecho y la del fallo.

Ra = renta actualizada.

n = número de meses transcurridos entre la fecha del hecho y la fecha del fallo.

i = interés puro o técnico, 6% anual o 0,4867 mensual (se representa: 0,004867).

En ese escenario debemos indicar que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, replicada por ser un consenso, entre otras, en la sentencia con Radicación número: 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146), del 22 de abril de 2015, se explica lo siguiente:

Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:

1) Se establece la renta mensual del fallecido, **destinada a la ayuda económica del grupo familiar**, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. **Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador**. El valor así calculado se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).

2) Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax) - (Tcons).

3) Con la renta actualizada (Ra) se calcula **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente. Así, **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$Rc = Ra \times (1 + i)^n$$

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tcons).

(...)

4) Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios **la renta dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.

Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir -(Rc) o (Rf)- por el tiempo consolidado o futuro -(Tcons) o (Tfut)-, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Atendiendo lo anterior es claro que los accionantes no han hecho un estudio juicioso de los valores que se deben comprender en las fórmulas para liquidar, a efectos de obtener el resultado correcto

del lucro cesante que pretenden obtener, pero, sobre todo, salta a la vista que en su ejercicio hacen uso de un valor erróneo como es el 100% de los ingresos que percibía al momento del hecho, la señora Ramírez Hurtado, y ello es equivoco porque: 1. No es lógico pensar que la mencionada demandante destinaba el 100% de sus ingresos al apoyo de su hogar, como lo sugiere la demanda y 2. Porque la mencionada no dejó de percibir el dinero que aduce, por el contrario en el certificado laboral expedido por la empresa Cripack S.A.S. y que se acerca al plenario, se observa que incluso hasta la fecha del documento, (23 de septiembre de 2021) la señora continuaba devengando su salario de manera normal, por lo que no hay como tal una renta dejada de percibir, y por tanto no hay un valor que sirva de sustento a la fórmula traída a colación.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.2.3. LUCRO CESANTE FUTURO”: Sobre el particular debe señalarse que en igual situación que el caso anterior, la togada incurre en un error al establecer la fórmula para liquidar el valor relacionado al lucro cesante futuro, pues para ello hace uso del siguiente criterio:

La fórmula para obtener el valor del lucro cesante futuro, es la siguiente:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante futuro.

i= Interés puro o técnico: 0,004867.

n= Número de meses transcurridos desde el momento en que se dé procedibilidad para incoar el presente medio de control - hasta la fecha en que la señora Ramírez Hurtado, alcance su expectativa de vida, esto es 720 meses.

1= Es una constante

Reemplazando tenemos:

$$S = \$1.806.677 \frac{(1+0,004867)^{720} - 1}{0,004867(1+0,004867)^{720}}$$

Sin embargo, debe tenerse claro que dicha consideración es errónea, pues es el mecanismo para actualizar una indemnización que ya ha sido concedida y que se debe atemperar a un tiempo determinado entre el hecho y el fallo que otorga el derecho, como se explica a continuación:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = indemnización consolidada, es decir, la comprendida entre la fecha del hecho y la del fallo.

Ra = renta actualizada.

n = número de meses transcurridos entre la fecha del hecho y la fecha del fallo.

i = interés puro o técnico, 6% anual o 0,4867 mensual (se representa: 0,004867).

En ese escenario debemos indicar que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, replicada por ser un consenso, entre otras en la sentencia con Radicación número: 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146), del 22 de abril de 2015, en donde se explica lo siguiente:

Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:

1) Se establece la renta mensual del fallecido, **destinada a la ayuda económica del grupo familiar**, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. **Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador**. El valor así calculado se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).

2) Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax) - (Tcons).

3) Con la renta actualizada (Ra) se calcula **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente. Así, (...) **la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo futuro (Rf), se calcula aplicando la siguiente ecuación:

$$Rf = Ra \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Donde: *i* = al interés mensual legal (0,004867) y *n* = (Tfut).

4) Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios **la renta dejada de percibir** por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.

Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir -(Rc) o (Rf)- por el tiempo consolidado o futuro -(Tcons) o (Tfut)-, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Atendiendo lo anterior es claro que los accionantes no han hecho un estudio juicioso de los valores que se deben comprender en las fórmulas para liquidar, a efectos de obtener el resultado correcto del lucro cesante que pretenden obtener, pero, sobre todo, salta a la vista que en su ejercicio hacen uso de un valor erróneo como es el 100% de los ingresos que percibía al momento del hecho, la señora Ramírez Hurtado, y ello es equivoco porque: 1. No es lógico pensar que la mencionada demandante destinaba el 100% de sus ingresos al apoyo de su hogar, como lo sugiere la demanda y 2. Porque la mencionada no dejó de percibir el dinero que aduce, por el contrario, en el certificado laboral expedido por la empresa Cripack S.A.S. y que acerca al plenario, se observa que incluso hasta la fecha del documento, (23 de septiembre de 2021) la señora continuaba devengando su salario de manera normal, por lo que no hay como tal una renta dejada de percibir, y por tanto no hay un valor que sirva de sustento a la fórmula traída a colación.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.3. PERJUICIOS MORALES”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a la entidad demandada por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de ella, que a su vez tenga la entidad suficiente para haber ocasionado el daño alegado, porque la parte actora no ha acreditado que se haya presentado una afectación o malformación en la malla vial y especialmente no ha demostrado que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito y por tanto del daño. Por lo anterior, y por el hecho flagrante de que no existe una calificación de invalidez que permita determinar la gravedad de los presuntos daños padecidos, cualquier tasación de los perjuicios morales resulta altamente especulativa en cuanto no existe un parámetro objetivo que permita su determinación.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.4. PERJUICIOS DEL DAÑO A LA SALUD”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio, en razón a que la parte demandante no puede endilgar esa responsabilidad a la entidad demandada, por no existir medio de convicción que permita establecer que se presentó una conducta omisiva, negligente o imprudente de ella, que haya ocasionado el daño, pues la parte actora no ha acreditado que se haya presentado una malformación en la vía que haya sido la que efectivamente causó el presunto daño, o que ello haya sido la causa determinante del accidente de tránsito, y ni siquiera ha acreditado de manera plausible el daño, es decir la pérdida de capacidad laboral de la señora Daniela Ramírez Hurtado.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.5. PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN”: Me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio en cuanto el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio (daño a la vida en relación) se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. Ello implica que desde la parte activa de la acción se debe demostrar de manera efectiva la existencia del daño a la salud referido, y ello no se presenta en el caso, pues no se ha podido demostrar por parte de los demandantes, la existencia de responsabilidad de la entidad demandada, y mucho menos de la aseguradora que represento, y con ello se evidencia la ausencia de obligación al respecto.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.6.”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a

que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten las demás solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.7”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten las demás solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.8”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten las demás solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.9”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que una condena en costas sólo tiene sentido en el escenario en que se decrete la procedencia de las responsabilidades administrativas de la entidad demandada, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN DENOMINADA “5.10”: Aunque la pretensión no se encuentra dirigida directamente contra mi prohijada, me opongo rotundamente a la prosperidad de esta, en razón a que la misma sólo tiene sentido en el escenario en que se decreten las demás solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta procedente acceder a dicha solicitud.

III. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

1. INEXISTENCIA DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La parte actora en su relato aduce que en el caso en examen la falla en el servicio se presenta por la existencia de un hueco en la calle 62 con carrera 1 J del Municipio de Santiago de Cali, resaltando que la responsabilidad del Distrito Especial de Cali se estructura desde su presunta omisión en el mantenimiento de la malla vial, sin embargo, tal aseveración no tiene soporte probatorio, ni sustento argumentativo desde el punto de vista de la sana crítica, pues no existen elementos de convicción que lleven a esa conclusión de manera inequívoca, lo cual resulta evidente tras realizar un análisis detallado de los elementos principales del señalamiento al Distrito que son: 1. Las fotografías que presuntamente corresponden al sitio y momento del accidente y 2. La Hipótesis del IPAT, elementos

estos sobre los que se debe anotar que, por ejemplo, respecto del primero, no hay referencia ni datos sobre la procedencia, el autor, el lugar, la fecha y demás detalles de las imágenes necesarios para establecer su vinculación directa con los hechos y sobre todo el daño alegado; y sobre el segundo elemento se debe decir que fue tomado cuando la escena se había alterado de manera sustancial, pues como se advierte en el mismo, fue tomado a las 45 minutos después de los hechos, en consecuencia la hipótesis puede corresponder o no a la percepción de quien lo diligenció, o al relato de alguien en el sitio, tiempo después del suceso, pero no puntualmente a lo realmente ocurrido, y sobre todo, debe considerarse que dicho documento sólo tiene la calidad de indicio, toda vez que el agente que lo suscribe no es un testigo presencial, todo sobre lo cual se ahondará más adelante.

Para sustentar la tesis anteriormente presentada, debe tener en cuenta el despacho que, fuera de los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado, la falla en el servicio es el título de imputación por excelencia bajo el cual se juzga la conducta de la Administración Pública, *imputatio iuris*, y por ello requiere esencialmente su prueba y acreditación, tal como la ha dicho el H. Consejo de Estado:

*“Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.*⁷ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Sobre la carga probatoria de los demandantes cuando se trata de regímenes subjetivos como la falla en el servicio, la doctrina nacional ha reiterado la anterior posición jurisprudencial:

*“...es claro que el hecho de que un daño le sea imputable a una persona pública no es suficiente normalmente para hacerla responsable: es necesario que la víctima demuestre que en su origen se encuentra un mal funcionamiento administrativo. Se trata de que el actor establezca sobre todo la realidad de los hechos, porque la calificación propiamente jurídica corresponde al juez. Naturalmente, un cúmulo probatorio deficiente pone en riesgo la prosperidad de las pretensiones. Se trata entonces de que, normalmente, **la responsabilidad por falta es una responsabilidad por falta probada**. Según Llorens-Fraysse, “hay responsabilidad por falta probada cuando el juez exige que la falta sea establecida con certeza (habitualmente) el juez no se contenta con indicios”.*

En consecuencia, si el demandante no prueba la falla y en el caso concreto ésta no se presume, aun cuando la Administración nada haga para exonerarse, el fallo será absolutorio.

Ahora bien, la prueba de la falta puede descomponerse en dos elementos, a saber: primero, la prueba del hecho invocado y, segundo, la prueba de su carácter anormal, o sea, la prueba de

⁷ “ARTÍCULO 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA MÉNDEZ. Radicado No. 19001-23-31-000-2011-00434-01(53977).

la violación de las obligaciones administrativas. *Esta segunda cuestión es en realidad una operación de calificación jurídica que el actor demanda al juez confirmar, y en la cual interviene la apreciación de este último.*⁹ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En esa medida, es deber de la parte actora acreditar, en primer lugar, que la entidad pública tenía a cargo unos deberes y obligaciones y, en segunda medida, que estos fueron completamente desconocidos o cumplidos parcial o tardíamente, sin embargo, en el presente asunto, no se ha logrado acreditar ninguno de los elementos para derivar una falla en el servicio en cabeza de la entidad territorial.

Ello se concluye porque en el escrito de la demanda los accionantes no acompañan elementos probatorios que puedan dar fe de la presunta omisión, contrario a ello, sustentan sus afirmaciones en dos presupuestos probatorios que carecen de la capacidad de estructurar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, y ello es así porque sobre los dos conceptos, tanto fotografías sin información de acreditación como Informes de Policía de Accidentes de Tránsito, se ha pronunciado el honorable Consejo de Estado para dar luces de cuál es el rol que cumplen estos dos elementos en un proceso en el que se discute la responsabilidad administrativa de una entidad, bajo la óptica de un régimen subjetivo de falla en el servicio, como se pasa a explicar de manera independiente.

En primer lugar respecto de las fotografías aportadas, se debe manifestar que: (i) no fue posible determinar con base en los metadatos, la fecha real en la que se capturaron las mismas y ni siquiera se sugiere en el escrito petitorio; (ii) no fue posible establecer desde los metadatos la ubicación del lugar en donde fueron tomadas; (iii) no fue posible establecer si la ubicación en la que fueron tomadas corresponde con el lugar y momento de los hechos que aquí se debaten; (iv) no fue posible establecer el autor encargado de capturar las fotografías, y finalmente; (v) no fue posible establecer la autenticidad y por tanto la validez del contenido reflejado en las fotografías. En este escenario es claro que el contenido de dicho material no puede ser utilizado para sustentar la existencia o no de un aspecto particular, en cuanto de ellas no se puede concluir nada sobre tiempo, modo y lugar.

Por todo ello, lo correcto de concluir, en aras de propender por el respeto del principio de legalidad y por el valor que debe tener la realidad procesal de cara a una decisión condenatoria o absolutoria en cualquier proceso judicial, es que no puede dársele razón o calidad de certeza a las fotografías aludidas, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo se desarrolló el referido accidente, es decir, no se puede considerar de manera definitiva que todo ocurrió debido a la existencia del hueco en el lugar del accidente, por el simple hecho de que a la demanda se allegó un material fotográfico que evidencia un hueco, pero del cual no se tiene constancia alguna de estar relacionado, como se dijo, ni con el momento, ni con el lugar, ni con el modo, ni con los sujetos involucrados.

Sobre el valor probatorio de materiales fotográficos, el Consejo de Estado en sentencia reciente ha considerado que:

(...) las fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse, con lo cual, el valor probatorio que puedan tener no depende

⁹ Saavedra Becerra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado. Tomo I. Grupo Editorial Ibañez. Págs. 313-314.

únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición. En otras palabras, **para que las fotografías tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, se debe tener certeza sobre la persona que las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas**, lo que normalmente se devela a través de otros medios complementarios. **De esta forma, la autonomía demostrativa de dichos documentos se reduce en la medida que se requieran otros medios de convicción que las soporten**¹⁰. (Subrayado y negrillas fuera de texto original)

Aunado a lo anterior y corolario de la incertidumbre que genera pretender establecer como cierto un hecho con base en una imagen de la que no se tienen datos, se puede traer a colación que (por ejemplo) en una imagen extraída del aplicativo Google Maps se puede consultar una serie de imágenes del sitio puntual, y particularmente la última que figura cercana a la fecha de los hechos, da evidencia que en el sitio exacto de los hechos según el relato de la demanda, es decir en la calle 62 con carrera 1 J del municipio de Santiago de Cali, no se presenta ningún tipo de mal formación, como se ve en seguida:



Como es apreciable, la anterior imagen por sí sola contrarresta la teoría de la demanda, con una única diferencia que, sobre la misma, sí se puede conocer la fecha, el autor, la ubicación exacta y la procedencia conforme al link de acceso que se le referencia. De igual manera se observa que más allá de las buenas condiciones de la vía, no corresponde el sitio con las imágenes que se aportan en el escrito introductor, pues en él se advierte un árbol (por ejemplo) que no se observa que exista en el sitio según lo apreciable.

Ahora bien, en segundo lugar y respecto de la descripción realizada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001113940 elaborado el 22 de enero de 2021, en donde plantea la hipótesis de la vía (306) o hueco en la vía, se debe decir que de la misma manera que ocurre con

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera (2018). Sentencia 05001233100020030399301 del 14 de febrero. C.P Ramiro Pazos Guerrero.

¹¹ https://www.google.com/maps/@3.4716746,-76.492348,3a,75y,323.82h,71.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1susy00UZomld6J7RtFTUt3w!2e0!5s20190701T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D18.228321719724576%26panoid%3Dusy00UZomld6J7RtFTUt3w%26yaw%3D323.823739971259!7!13312!8i6656?hl=es&entry=tu&g_ep=EgoyMDI1M01yNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

el material fotográfico, este documento no tiene la entidad suficiente para determinar la causa efectiva del siniestro, toda vez que lo único que representa es la apreciación del agente que no fue testigo de los hechos y que, en este caso llegó al lugar 45 minutos después si se tiene en cuenta lo descrito en la demanda, en donde se manifiesta que el hecho ocurrió “aproximadamente a las 20:05 horas”, mientras que el IPAT indica que fue tomado a las 20:48 p.m., es decir con tiempo considerable desde lo ocurrido y luego de que el sitio fuese alterado, por lo que aquel no está en la capacidad de determinar, con su observación posterior, la que fue o pudo ser la causa efectiva del accidente, por cuanto no lo presenció.

De lo anterior se concluye que la parte demandante no ha logrado demostrar que la causa eficiente del hecho generador del daño fue la presunta omisión en el mantenimiento de la vía por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, en razón a que, la única prueba que adjunta para su demostración es el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001523601, suscrito por la autoridad, quien llegó al lugar del accidente alrededor de 45 minutos después del suceso, como se advierte en el documento técnico:

2. El día 22 de enero de 2021, **siendo aproximadamente las 20:05 horas**, la señora **DANIELA RAMIREZ HURTADO**, se desplazaba en una motocicleta AKT, línea AK110 NV, de placa BKZ-87 D; se movilizaba por la calle 62 con carrera 1 J del municipio de Santiago de Cali.



Incluso se advierte un error en la discriminación de la hora de ocurrencia, lo cual es comprensible toda vez que como se dijo, el agente no presenció los hechos y por tanto llenó los datos del documento con la información que infirió o con la que le pudiese dar cualquier persona presente en el momento en el que él llegó, lo cual es susceptible de imprecisiones, como la que se comete con la hora de ocurrencia, que para el agente fue a las 20:45 pm y la propia víctima indica que fue cerca de las 20:00 horas.

Por este motivo ni la hipótesis ni el contenido del informe, puede entenderse como plena prueba de la causa eficiente del hecho, ya que no representan el momento preciso de la ocurrencia del accidente ni las condiciones particulares que se pudieron dar para ello.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 12 de abril de 2024, ha referido que:

*Es importante precisar que **las hipótesis que se consignan en los correspondientes informes del accidente de tránsito aluden a una posible causa “estimada” por el agente de tránsito quien deduce la causa del evento a partir de lo observado en la escena del siniestro, mas no un hecho debidamente probado, dado que, en muchos casos, como en el presente, la autoridad de tránsito no presencia directamente el accidente, sino que***

arriba al lugar en un tiempo posterior a la ocurrencia de este¹². (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido, es claro que el IPAT no prueba *per se* que la causa eficiente del accidente haya sido la presunta existencia de un hueco, pues incluso lo que se advierte de él, es que refleja una presunción del agente de tránsito cuando dice que llegó y ya ni la lesionada ni la moto se encontraba, y luego de ello relata lo que sabe o le dijeron, como se ve a continuación (se transcribe porque no resulta totalmente legible):

13. OBSERVACIONES Al llegar al lugar de los hechos la ciudadanía guardó la motocicleta porque había trasladado la lesionada al centro médico (...)

“Nota: Al llegar al lugar de los hechos la ciudadanía guardó la motocicleta porque había trasladado la lesionada al centro médico (...)”.

De lo anterior se puede evidenciar que el relato no pertenece a una percepción directa del agente que suscribió el informe respecto de los hechos, sino por lo apreciado con posterioridad, por lo que aun existiendo la presunta afectación en la malla vial (que no se advierte), no podría concluirse que fue ella lo que ocasionó el accidente, pues no es posible determinar elementos como el recorrido del vehículo, la velocidad, las condiciones climáticas o atmosféricas entre otros aspectos que pueden ser determinantes al momento de realizarse una actividad riesgosa como la de conducir un vehículo.

Por todo ello, el valor probatorio del Informe policial de accidente de tránsito No. **A001113940**, no es suficiente para acreditar la falla en el servicio aludida por los accionantes para solicitar la responsabilidad de la entidad territorial, pues reitero, se trata de meras especulaciones del agente de tránsito que hizo su aparición en el sitio de los hechos con un tiempo importante de diferencia y cuando la escena estaba alterada, lo cual claramente no puede revestir el carácter de una verdad absoluta, y al no existir en el expediente otro medio de convicción que confirme la hipótesis aludida en el IPAT, no es posible declarar que la causa del accidente fue la planteada.

Frente al carácter probatorio del Informe Policial de Accidente de Tránsito, la postura jurisprudencial del Tribunal Administrativo del Valle ha sido pacífica, tal como se observa a continuación:

Así entonces, el informe policial de accidente de tránsito y su aclaración por sí solos no permiten determinar que el hueco en la vía haya sido la causa eficiente y única del daño; las demás pruebas obrantes en el plenario como la historia clínica, los testimonios, los dictámenes periciales de la Junta Regional de Calificación del Valle y del Instituto de Medicina Legal, analizados en conjunto no permiten a la Sala tener certeza acerca de cuál fue la causa eficiente del daño, específicamente determinar si el accidente se causó por la existencia de un hueco en la vía, o por la culpa exclusiva de la víctima, pues dichos elementos probatorios solo indican la ocurrencia del accidente, la causación del daño y de algunos perjuicios a los

¹² Sentencia del 12 de abril de 2024. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 19001333170120100035801 (59.914).

*demandantes pero no el nexo causal*¹³. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

*En este punto conveniente es precisar, que la parte actora achaca como causa eficiente del accidente de tránsito ocurrido el 31 de mayo de 2015, a un hueco existente en la vía, soportando su aseveración en el referido informe de tránsito, sin embargo, no puede pasarse por alto que se trata de una hipótesis; luego dicho informe por sí solo no constituye prueba suficiente de dicha aseveración, para ello se necesitaba de otras pruebas como las testimoniales, empero, los testimonios en este asunto solo rindieron declaración sobre las relaciones afectivas de la víctima con los demás demandantes*¹⁴. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Con lo anterior, logra la Sala colegir que efectivamente la señora Laura Marcela Moreno Abelardi padeció un accidente de tránsito el día 05 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta por la altura de la carrera 56 con calle 12, cuando presuntamente cayó por culpa de unos huecos en la vía, que en el informe de accidente de tránsito y croquis suscrito por el funcionario que atendió la eventualidad, se dejó constancia de la existencia de huecos en la vía que transitaba la víctima, no obstante, esta Corporación no puede determinar fehacientemente que la causa del daño haya sido el mal estado de la vía, esto es, la presencia de huecos en ella, toda vez que si bien se acreditó la existencia de los huecos, en el informe, mas no hay certeza de ello, máxime que no hubo testigo presencial de los hechos u otra prueba que pruebe que efectivamente fue la causa del accidente. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Por lo anterior, es menester indicar al despacho que la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria de demostrar la falla en el servicio como elemento constitutivo de la responsabilidad del Estado, pues no obra en el expediente algún medio de convicción idóneo, pertinente, útil y concluyente que permita establecer la existencia de la presunta omisión del Distrito de Santiago de Cali, habiéndose explicado ampliamente los alcances limitados que tienen los elementos de convicción allegados.

En este sentido, al no acreditarse la falla, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada la presente excepción.

2. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD

En el presente caso la parte actora pretende atribuir la responsabilidad de la ocurrencia de un accidente a la entidad territorial de Santiago de Cali con fundamento en la supuesta inacción respecto del mantenimiento de la malla vial del sitio en que ocurrió el siniestro y para ello pretende hacer eco de lo contenido en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001113940 elaborado el 22 de enero de 2021, sin embargo y en caso de darle pleno valor probatorio, de dicho documento lo que se puede extraer es que la víctima estaba conduciendo en contravía de las obligaciones de tránsito dispuestas para el tipo de automotor involucrado.

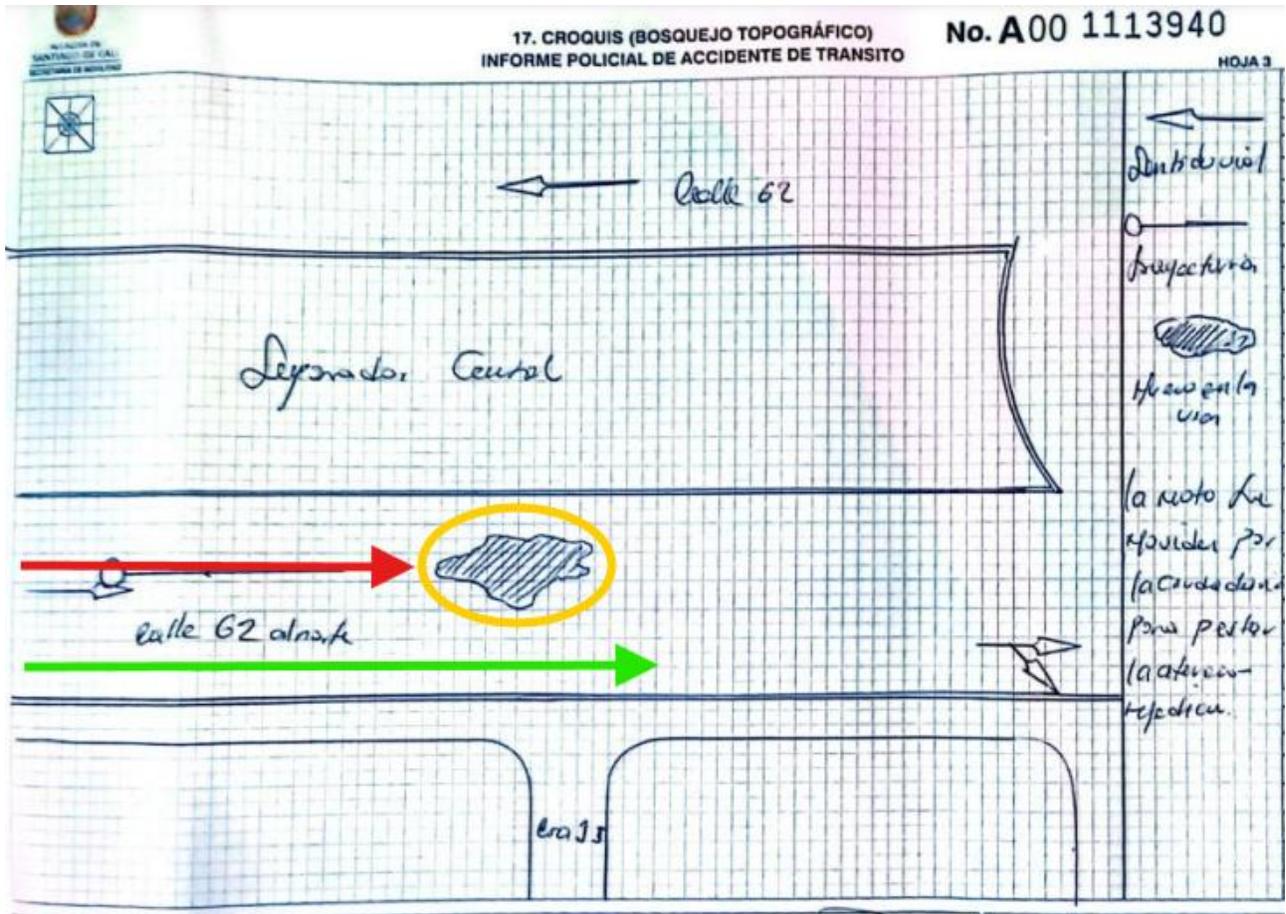
En tal sentido cabe señalar que la demanda indica de manera específica que la señora Ramírez Hurtado conducía una motocicleta, pues en el hecho segundo del líbello petitorio la apoderada indica

¹³ Sentencia del 22 de agosto de 2019. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Zoranny Castillo Otorora. Radicación No. 76001333301320140019801.

¹⁴ Sentencia del 30 de julio de 2021. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Fernando Augusto García Muñoz. Radicación No. 76001333300620160009403.

“la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, se desplazaba en una motocicleta AKT, línea AK110 NV, de placa BKZ-87 D”. Por lo tanto, debemos ubicarnos en las responsabilidades de tránsito dispuestas para este tipo de vehículos.

Ahora bien, en el IPAT del que hace eco la parte actora, se hace una representación de lo que pudo ser la escena del accidente y de él se evidencia lo siguiente:



Con la flecha roja hemos resaltado lo que el IPAT indica era la posición y trayectoria de la motocicleta conducida por la señora Ramírez Hurtado, con el círculo amarillo hemos representado el hueco o afectación en la malla vial que presuntamente ocasionó el siniestro y con la flecha verde hemos representado la posición y trayectoria que debería haber llevado la víctima en su ejercicio de conducción. De los anteriores datos se puede concluir con claridad que la situación se ocasionó en cualquier caso por la acción de la víctima de conducir en contravía de lo establecido en las normas de tránsito para vehículos tipo motocicleta, es decir por el carril derecho, pues, aun en un escenario en el que exista la afectación vial, el accidente no se hubiese presentado si la víctima hubiese conducido por el carril que le correspondía.

En relación con lo manifestado se debe traer a colación lo establecido en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, perteneciente al capítulo V referente a ciclistas y motociclistas, el cual dice:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera

u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Aunado a ello se debe tener en cuenta que, según el IPAT, el siniestro se presentó en una zona considerada como “Residencial”, por lo que, atendiendo a las estipulaciones del Código Nacional de Tránsito, el límite máximo para circular en este tipo de zonas es de 30 km/h, sumado al hecho de que por la hora en que presuntamente se presentó el suceso, la velocidad se debía disminuir aún más, por lo que a una conducción menor a 30 km/h, era posible, y debió ser posible esquivar el supuesto hueco.

En este contexto es claro que nos encontramos ante evidentes incumplimientos de las normas de tránsito por parte de la víctima, situación que es determinante para que se produzca el resultado dañoso, y en tal sentido nos encontramos ante la configuración de los elementos propios de la figura de culpa exclusiva de la víctima en términos de lo considerado para esta figura por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, al respecto se debe hacer referencia a lo que el Consejo de Estado en su Sección Tercera, mediante sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744), ha dicho al referirse sobre la culpa de la víctima:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Bajo esta perspectiva, es menester indicar que la demandante al circular incumpliendo las normas de tránsito especiales y particulares para el tipo de vehículo que conducía, se expuso completamente al riesgo, en el entendido de que renunció a su propia seguridad y confió en sortear de manera imprudente la actividad peligrosa de conducir a pesar de tener la obligación de conocer que no puede exceder el límite máximo de velocidad establecido para su vehículo y que el carril por el cual le correspondía desplazarse -el derecho- fue destinado para que su integridad se vea lo menos comprometida en escenarios de riesgo latente como lo son la conducción de vehículos.

Sobre este último particular, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernández, en sentencia del 09 de diciembre de 1996, proferida

dentro del expediente con radicado No. 9722, indicó lo siguiente:

“Quien conduce debe prever que aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico puede ser evitado con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor”. (Negritas fuera del texto original)

Aquí brilló por su ausencia, para el momento del hecho, el ejercicio de actitud síquica de la conductora de la motocicleta, como quiera que, al ya inherente riesgo de conducir, le añadió por voluntad propia la conducta aún más riesgosa de hacerlo sin prever las normas de tránsito, y en tal sentido exponerse a que ello le llevara a un desenlace como el que alega le terminó ocurriendo. En suma, es contundente que no hubo una contribución activa de su parte con miras a evitar la ocurrencia del daño, dado que no cumplió sus obligaciones para ejercer la actividad peligrosa de conducir y por el contrario su actitud imprudente la expuso a una situación de la que terminó desencadenando la situación dañosa que nos ocupa.

En tal contexto entonces es procedente concluir que las lesiones que manifiesta haber sufrido la actora, son un claro ejemplo de dejar al azar su seguridad y no adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes, y bajo esta premisa, es claro que la causa eficiente del daño no corresponde ni puede ser atribuida a la falla alegada, sino a una falta de cumplimiento de deberes legales y a la falta de precaución en el deber objetivo de cuidado, pues de haberse adoptado las medidas de seguridad antes indicadas, las cuales revisten las características de ser obligatorias cuando de asuntos de tránsito se trata, el hecho dañoso objeto de litigio no se hubiera configurado.

En este sentido, al acreditarse una culpa exclusiva de la víctima, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL ACTUAR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL DAÑO ALEGADO

Se invoca este medio exceptivo atendiendo a que como se explicó en la consigna anterior, la parte actora no logró probar la responsabilidad que pretende que sea imputada al ente territorial, pues no acercó medio de convicción con el que se pueda acreditar que se presentó una falla en el servicio que haya ocasionado afectaciones a los demandantes y que haya sido consecuencia de una conducta negligente, retardada u omisiva de la que pueda predicarse un nexo de causalidad entre la indebida prestación del servicio de la entidad demandada y el daño alegado fruto del accidente ocurrido el 22 de enero de 2021, contrario a ello, como se explicó ampliamente en apartes anteriores, se evidencia la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, lo cual resulta determinante para generar el desenlace dañoso por el que se exige perjuicios y lo que a su vez desliga la actuación u omisión del ente territorial del daño, es decir, rompe el nexo de causalidad.

Al respecto, el artículo 2341 del Código Civil, dice:

*“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”, se desprende necesariamente que **es obligatorio que la parte demandante acredite la existencia de tres elementos:** 1) el hecho dañoso acaecido culpablemente (o delictualmente si es el caso), 2) el daño y **3) la relación de causalidad entre esos dos elementos.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En igual sentido, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de septiembre de 2002, expediente 6143, señaló:

*“(…) Toda responsabilidad civil extracontractual se estructura sobre tres pilares fundamentales que, por lo general, debe demostrar el demandante: el hecho dañoso o culpa, el daño **y la relación de causalidad** (…)*”. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Igualmente, señaló la Corte Suprema de Justicia que es el demandante quien debe acreditar estos tres elementos, y en tal sentido ha dicho lo siguiente:

*“(…) se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que **quien reclama a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores** (…)*”. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Así entonces, en el escenario de análisis conductual que ofrece el esquema de la falla de prestación del servicio, los elementos que deben soportar la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado también son semejantes. No debe perderse nunca de vista que siempre recae en la parte actora la carga probatoria de demostrar al operador judicial la culpa - en este caso - el hecho o conducta constitutiva de falla en el servicio, el daño y su respectiva magnitud en aras de poderlo cuantificar y finalmente, pero no menos importante, el nexo de causalidad entre los dos primeros.

Así lo entendió el Magistrado Jorge Santos Ballesteros en Sentencia 6878 del 26 de septiembre del 2002, cuando dijo:

“El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino el artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e imprevisibles al tiempo del acto o contrato señala que si no se puede imputar dolo al deudor, éste responderá de los primeros cuando son “consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Por lo demás, es el sentido del artículo 2341 ib. el que da la pauta, junto con el anterior precepto, para predicar la necesidad del nexo causal en la responsabilidad civil. (...) El causalismo ha sido entendido como un método filosófico- científico que intenta explicar los fenómenos a través del estudio de sus causas, de tal manera que la pretensión de reconocer en los sucesos de la vida una relación de causa-efecto se presenta como una de las búsquedas más grandes del ser humano, un delito o culpa – es decir, de acto doloso o culposo– hace responsable a su autor, en la medida en que ha inferido daño a otro”.

Aterrizando al caso podemos afirmar entonces que no hubo culpa porque el hecho omisivo que el apoderado demandante quiere presentar como generador del daño padecido por la víctima del caso, en realidad no lo fue, ello porque como se explicó en el apartado del medio exceptivo anterior, dicha responsabilidad sólo puede ser atribuida en el caso bajo examen, a la culpa exclusiva y determinante de la víctima, que en evidente desconocimiento de las obligaciones a ella impuestas y a las normas de tránsito, decidió exponerse al riesgo y a una situación en la que el desenlace dañoso finalmente ocurrió, lo cual, resulta altamente probable si se considera que la misma actividad de conducir es riesgosa y más si se realiza en desconocimiento de la Ley, como puede ser en este caso la desatención de lo contenido en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002 antes reseñado.

En ese sentido se expone que, para la procedencia de la figura de la culpa exclusiva de la víctima, se requiere de lo siguiente: la presencia de un actuar: positivo o negativo, esto es, de una acción u omisión por parte de quien alega padecer el daño; y ese actuar, viene a ser el determinante y exclusivo del hecho que materializa el acontecer de las lesiones infligidas.

*(...) Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos. **En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante frente a aquélla**, casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño. En ese sentido, la Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente. **No se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño**; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis¹⁵.*
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Como en el caso en cuestión lo que se puede extraer de los elementos de hecho y de derecho es que la víctima tuvo una participación determinante en el desenlace, toda vez que no existe prueba de la falla, sino que se advierte su actuación en desconocimiento de sus obligaciones legales respecto de la labor de conducir como lo es transitar por el carril derecho.

En este sentido, al no acreditarse el nexo de causalidad, no es posible conceder una declaratoria de la responsabilidad, por lo que, solicito al señor Juez declarar probada esta excepción.

¹⁵ Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4. CONCURRENCIA DE CULPAS

De manera subsidiaria, considerando que sin lugar a duda la conducta de la víctima influyó en el resultado dañoso y, de no estimarse que esta fue la causa adecuada del mismo, se deberá analizar la concurrencia de culpas a luz de lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, que contempla: “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

*“Sobre el tema de la concausa, esta Corporación ha sostenido que **el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el cuántum indemnizatorio (artículo 2357 del Código Civil) en la medida en que la misma hubiere dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado. Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales –daño antijurídico, factor de imputación y nexa causal–, la conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del cuántum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño**”¹⁶. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En igual sentido dice el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en sentencia que ya se citó anteriormente, que:

*(...) **incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación.** Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis¹⁷.” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Entonces, de los argumentos antes señalados se deriva la relevancia de la participación de la víctima en la causación del daño, por cuanto la señora Daniela Ramírez Hurtado en su condición de conductora del vehículo en el que ocurrió el accidente, actuó de manera imprudente al transitar por un carril que no le corresponde y probablemente a una velocidad indebida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002.

En conclusión, sea o no la causa adecuada del daño, lo cierto es que la conducta de la víctima incidió directa y determinantemente en la causalidad de los hechos materia de debate, de manera que, de no eximir de responsabilidad a la entidad demandada, deberá ser objeto de valoración para que se reduzca la remota condena en contra de ella.

¹⁶ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 19256 del 7 de abril de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

¹⁷ Sentencias: de 4 de octubre de 2007, exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, exp. 16696; sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5. FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE LOS PERJUICIOS Y EXAGERADA TASACIÓN DE ESTOS

La parte demandante no demostró la existencia de los perjuicios materiales e inmateriales que solicita, pues (i) no aportó el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta de Calificación de Invalidez que permita determinar la existencia del daño físico y su gravedad y (ii) no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer que la víctima dejó de percibir ingresos al momento de los hechos y la causa de estos.

- **Frente al perjuicio de Daño Emergente, Lucro Cesante Consolidado y Futuro**

La parte demandante en el libelo petitorio indica en la parte de “PERJUICIOS MATERIALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y LUCRO CESANTE FUTURO” que pretende el reconocimiento de:

- **\$49.000.000 millones de pesos**, por concepto de lucro cesante consolidado
- En el apartado de lucro cesante futuro, se manifiesta que se pretende lo resultante de la siguiente ecuación:

$$S = \$1.806.677 \frac{(1+0,004867)^{720} - 1}{0,004867 (1+0,004867)^{720}}$$

- Aunque el título de la solicitud incluye el término “Daño Emergente”, realmente sobre dicho aspecto no se hace relación ni se estima el valor

Ahora bien, respecto de las sumas y criterios que se exponen, salta a la vista que sus resultados carecen de una liquidación objetiva, pues podemos ver que se usan como criterios base de liquidación, aspectos hipotéticos o desacertados como los siguientes:

En primera medida dice la togada peticionaria que la expectativa de vida de la víctima es de “más de cincuenta (50) años, justo después de haber indicado que la expectativa de vida que propone el DANE es de 60 años, véase:

- a) **Promedio de vida probable de 60 años, partiendo que ella nació el día 14 de enero de 1996, es decir con más de cincuenta (50) años de expectativa de vida, según las proyecciones de población 2005-2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.**

Ello comporta un error de interpretación, toda vez que justamente el punto de promedio de vida probable que propone la entidad de estadísticas, según la información que se aporta en la demanda, se refiere al máximo de estimado de vida, por lo que a dicho valor (60 años) se debe restar la cantidad de años de la persona sobre la cual se pretende estimar la expectativa, en este caso si la víctima contaba con 25 años a la fecha de los hechos, el resultado de la expectativa de vida sería 35 años y no más de cincuenta como se indica en el escrito.

Ahora bien, respecto del ingreso mensual sobre el cual calcular la pérdida, también se incurre en un error, pues se observa que la demanda sugiere que el valor que se relaciona fue el que la señora Ramírez percibió hasta el momento de los hechos, cuando realmente nunca dejó de percibir su

salario, véase:

- b) El ingreso mensual promedio percibido por la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, hasta antes y en el momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, cuando desempeñaba el cargo de Auxiliar Contable en la empresa **CRIPACK S.A.S.**, era de \$1.173.897, el valor actualmente indexado más el factor prestacional,

Sin embargo, se puede observar de los anexos del escrito introductorio, que la accionante nunca dejó de percibir sus ingresos, véase:

CERTIFICACIÓN LABORAL

CRIPACK S.A.S CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la señora DANIELA RAMIREZ HURTADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.191.836 de Cali (V), labora en nuestra compañía desde el diez (10) de septiembre de 2018 hasta la fecha con contrato a término indefinido, desempeñando el cargo de Auxiliar Contable y devengando un salario mensual de \$1.173.897 y un auxilio de transporte por \$106.454.

La presente constancia se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2021.

Cordialmente,


Alejandra Copete S.
Jefe de Talento Humano

Dicha información relata claramente que incluso ocho meses después de los hechos, la señora Ramírez seguía trabajando en el mismo cargo, con las mismas condiciones y devengando el mismo ingreso, lo que a su vez significa que nunca perdió la capacidad laboral, y sobre todo para la relevancia de este punto, que nunca dejó de percibir su salario a causa de los hechos que aquí se discuten, motivo por el cual, no es dable considerar que su salario es el ingreso base para calcular una pérdida que nunca se dio.

Aunado a ello se indica que se realiza la estimación de los valores, pero sobre el supuesto de una pérdida de capacidad laboral:

- c) La calificación de porcentaje de pérdida de capacidad por invalidez expedida por la Junta Regional de Invalidez una vez sea expedida.

Lo cual corresponde a una clara suposición, pues la togada desde su percepción no puede

establecer que habrá una pérdida de capacidad laboral, y menos cuál es ella, y aún así, hace uso de un valor especulativo para determinar sus pretensiones.

En este sentido, es necesario recordar que el perjuicio del lucro cesante ha sido entendido como uno de naturaleza material, económico, de contenido pecuniario y que consiste en la afectación de un derecho patrimonial reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir a causa del daño padecido.

Por lo anterior, para que sea posible el reconocimiento del perjuicio de naturaleza económica, es necesario que se acredite su existencia cierta, actual o futura mediante elementos de convicción que permitan determinar el valor dejado de percibir. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(...) perjuicio que el daño ocasionó (...). **Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, “(...) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario (...).***¹⁸
(Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En igual sentido, la misma corporación afirmó en sentencia del 24 de junio de 2008, que:

*(...) **En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.** Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (...)*

*Vale decir que **el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...)** Por último, están **todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables**”.¹⁹ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En consecuencia, el lucro cesante no puede constituirse sobre conceptos hipotéticos o simples conjeturas que no están justificadas en posibilidades ciertas y objetivas y mucho menos en datos equívocos. De manera que resulta como deber indispensable de la parte demandante acreditar el ingreso que dejó de percibir al momento de la ocurrencia del daño, pero todo esto basado en medios

¹⁸ Sentencia del 12 de junio de 2018. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2107-2018.

¹⁹ Sentencia del 24 de junio de 2008. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente SC 2000-01121-01

de convicción ciertos y no meramente especulativos.

A su vez el Consejo de Estado en sentencia de unificación reciente del 10 de julio de 2019, limitó todas las posibles discusiones que se pudieran derivar de este perjuicio y eliminó la presunción de que toda persona en edad productiva devenga al menos un salario mínimo, en cuanto contrariaba con uno de los elementos, esto es, la certeza exigida para conceder dicha indemnización, de manera que estableció que el lucro cesante solo sería reconocido cuando obren las pruebas suficientes que lo acrediten:

La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (...)

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

*La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: **i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior** o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad_o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.²⁰ (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En definitiva, resulta claro que no es posible reconocer ningún perjuicio a título de lucro cesante (consolidado o futuro), en cuanto la parte demandante sustentó sus pretensiones en meras suposiciones y no allegó ningún medio probatorio que permitiera demostrar que la presunta afectada como consecuencia del hecho que se alega dejó de percibir una remuneración, pues aunque en el caso puede entenderse que la demandante tenía un ingreso por su trabajo, no se explica cuál fue el ingreso que dejó de percibir a causa del accidente, por lo que cualquier indemnización de este perjuicio, en el caso puntual, resultaría insostenible y exagerada.

- **Frente a los perjuicios de daño emergente**

²⁰ Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572).

Aunque los demandantes no discriminan de manera clara lo que pretenden que se les reconozca como daño emergente y sólo hacen mención al aspecto en un punto en el que lo fusionan con criterios de lucro cesante, de las pruebas acercadas al proceso se advierte que no existe prueba alguna de un detrimento que se pueda considerar de este tipo.

Al respecto, ha dicho el H. Consejo de Estado que:

(i). el daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad - para el afectado - de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. (...) necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega. (...)

Por tales motivos, ante la evidente falta de solicitud puntual y de soporte probatorio que permita determinar si existieron valores que fueron efectivamente pagados por la víctima a causa única y directa del daño alegado, no resulta procedente que se le reconozca tales perjuicios.

- **Frente a los perjuicios morales**

La parte demandante solicitó a título de indemnización por los perjuicios morales las siguientes sumas:

- DANIELA RAMÍREZ HURTADO: cien (100) SMMLV
- NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO: ochenta (80) SMMLV
- JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ: ochenta (80) SMMLV

Sobre dicha pretensión debe afirmarse que su tasación no puede derivarse de calificaciones subjetivas por parte de la togada de los demandantes, sino que debe basarse en factores objetivos como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, tal como lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014.

En este sentido, la parte actora está solicitando como indemnización por concepto de perjuicios morales, valores evidentemente desproporcionados, pues como se adujo anteriormente, es pacífica la determinación del Consejo de Estado acerca de estos aspectos, y ha realizado una labor resaltable al determinar con detalle las sumas que pueden proceder en cada caso de reparación, por lo que era un deber del actor judicial el atender dichos parámetros.

En ese sentido ha dicho el órgano de cierre que para la reparación del daño moral en casos en los que se alega una lesión antijurídica producto de una acción u omisión de un agente del estado, puntualmente hablando de daños como lesiones físicas ocasionadas con ocasión de responsabilidad administrativa, los valores procedentes son los siguientes:

Tabla 2. Reparación del daño moral en caso de lesión

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1 Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	NIVEL 2 Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	NIVEL 3 Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	NIVEL 4 Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	NIVEL 5 Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Como vemos, son sumas ostensiblemente alejadas de la concepción de la parte demandante pues en gracia de discusión, al momento de esta contestación, la pérdida de capacidad laboral demostrada por la parte actora es cero (0) por lo que no podría ubicarse ni ella ni sus familiares en ninguno de los rangos establecidos por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, motivo por el cual, los valores pretendidos resultan claramente exagerados y consecencialmente improcedentes.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, al respecto dice Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez²¹:

*La lesión a la que se refiere la cláusula constitucional y legal es otra cosa, sin embargo. Para que exista lesión en sentido propio no basta que perjuicio exista un perjuicio material, una pérdida patrimonial; **es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea antijurídico, antijuridicidad en la que está el fundamento, como ya notamos, del surgimiento de la obligación reparatoria.** (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Y como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusivamente a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente a los perjuicios por daño a la salud**

La parte actora solicita que se reconozca en favor de la señora Daniela Ramírez Hurtado la suma de 100 SMMLV, por concepto de daño a la salud. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha definido el daño a la salud, así: “(...) *se puede decir que se avanza a una noción más amplia del*

²¹ García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma”²².

Ahora bien, respecto a la acreditación y liquidación de este tipo de perjuicio inmaterial, el Alto Tribunal ha afirmado lo siguiente:

“La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, **única y exclusivamente para la víctima directa**, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

GRAFICO REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa
	SMLMV
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:

- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso”²³.

Como vemos, el daño a la salud también se reconoce dependiendo de la gravedad o levedad de la lesión y, en la misma medida, atendiendo a criterios como los ya expuestos, esto es, afectaciones

²² CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Rad. 28804 del 28 de agosto de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

²³ Ibídem.

a la actividad rutinaria de la víctima directa que se pudiese acreditar con un dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual no fue aportado al proceso por lo que al momento de este escrito, no existe porcentaje de pérdida de capacidad laboral el cual se pueda cuantificar para liquidar, más allá de la inexistencia de la obligación de indemnizar por parte de la entidad demandada. Así las cosas, en el caso concreto, resulta evidente una cuantificación exagerada que desatiende la pacífica determinación del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, ya citado.

Ahora bien, más allá de la delimitación en abstracto de las sumas procedentes según qué casos y qué tipo de lesión, no se puede perder de vista que el daño o lesión a reparar al que se hace referencia, no es un daño cualquiera, debe tratarse indefectiblemente de un daño antijurídico para que proceda la correspondiente indemnización, para lo cual se pueden atender los criterios expuestos por Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez, ya citados²⁴.

Como en el caso que nos ocupa es evidente que el daño alegado por la parte actora es uno que no puede predicarse como antijurídico, dada la configuración de los medios exceptivos ya argumentados en apartes anteriores, es claro que no puede proceder reparación alguna sobre este aspecto en el caso particular.

No obstante, si en el remoto e improbable caso, el despacho considera que sí existen los elementos para determinar la procedencia de la indemnización, esta sólo podrá ser reconocida a la víctima y deberá obedecer a los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en atención única y exclusiva a lo efectivamente demostrado en el proceso.

- **Frente al perjuicio a la vida en relación**

Los demandantes solicitan como indemnización de este perjuicio la suma de 100 SMMLV a favor de cada uno de los demandantes, así:

- DANIELA RAMÍREZ HURTADO: cien (100) SMMLV
- NOLBERTO ANDRES BEDOYA GIRALDO: cien (100) SMMLV
- JUAN ESTEBAN BEDOYA RAMIREZ: cien (100) SMMLV

Frente a ello, se debe afirmar que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha determinado que este perjuicio se encuentra subsumido en el daño a la salud, por lo que, no hay lugar a reconocer esta indemnización de manera autónoma, sino incluida en el perjuicio ya mencionado. En ese sentido el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 14 de septiembre de 2011 con Radicación No. 38222, dijo:

(...), cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. (...)".

²⁴ García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomas Ramón, Curso de derecho administrativo, t II, 14 edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, p. 378

Así mismo, el daño a la salud es reconocido únicamente a la víctima directa y no a sus familiares, por lo que, se debe manifestar que consecuentemente, la indemnización solicitada, no es procedente en ningún sentido en este caso.

- **Frente a otras medidas reparatorias**

En el mismo hilo argumentativo del punto anterior este tipo de medidas pretende o parece pretender la reparación de aspectos diferentes a los perjuicios instituidos como reparables, por lo que nos encontraríamos en un escenario idéntico al de la solicitud abordada anteriormente, y en tal sentido se presenta un dilema principal que es el pretender una doble indemnización o reparación y un dilema secundario que es pretender la indemnización o reparación de un daño que no está ni demostrado ni tan siquiera sugerido, motivos por los cuales la solicitud resulta improcedente a la luz de los términos presentados en la sentencia ibidem.

- **Frente a las pretensiones “5.6”, “5.7”, “5.8”, “5.9” y “5.10”**

Dichas pretensiones relacionadas a la forma en la que se debe dar la liquidación de la indemnización o actualización de ella y de igual manera a los términos en los que en sentir de los actores se debe dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, lo mismo sólo tendría lugar en el escenario en que se decreten todas las solicitudes económicas, y como ello en el caso *sub examine* ello no resulta procedente dada la imposibilidad de los actores por demostrar el daño, la causa eficiente del daño, el nexo causal y la falla de la entidad demandada, tampoco resulta coherente considerar procedentes estas solicitudes.

CAPÍTULO III. CONTESTACIÓN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE AL HECHO PRIMERO: No es un hecho que dé base a la presente convocatoria, se trata de un mero enunciado del medio de control de reparación directa promovido por Daniela Ramírez Hurtado y otros que cursa ante este despacho.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: No es un hecho que dé base a la presente convocatoria, se trata de un mero enunciado de los elementos de hecho y de derecho que dan sustento al medio de control de reparación directa promovido por Daniela Ramírez Hurtado y otros.

FRENTE AL HECHO TERCERO: Es cierto parcialmente que el ente territorial suscribió el contrato de seguro representado en la **Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000181-1**, con vigencia desde el 23 de junio de 2020 hasta el 19 de mayo de 2021. Igualmente es cierto que en la póliza se pactó un coaseguro entre las compañías Aseguradora Solidaria de Colombia, SBS Seguros Colombia S.A., Chubb Seguros Colombia S.A., HDI Seguros S.A. y AXA Colpatria Seguros S.A. Sin embargo, no es cierto que se encuentren amparados todos los riegos, pues ello dependerá del cumplimiento de las condiciones particulares y generales de la póliza de seguro.

**IV. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA PRESENTADA EN CONTRA DE SBS
SEGUROS COLOMBIA S.A. EN VIRTUD DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.
420.80.994000000181-1**

En todo caso, si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a la vinculación de mi representada en virtud de la **Póliza de Responsabilidad No. 420.80.994000000181-1**, pese a la evidente existencia de falta de demostración de la falla en el servicio, de la falta de estructuración del nexo causal y del hecho exclusivo y determinante de la víctima como causa única y exclusiva del daño alegado por la parte demandante; solicito, sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, sino que por el contrario con la intención de que la presente constituya **OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO**; se verifique por parte del señor Juez, circunstancias como: **1)** inexigibilidad de la obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora al no realizarse el riesgo asegurado en la póliza, **2)** la eventual obligación de la compañía aseguradora no puede exceder el límite del valor asegurado en la póliza **3)** la responsabilidad de la aseguradora se circunscribe al porcentaje de participación conforme al coaseguro pactado, **4)** inexistencia de solidaridad, **5)** las exclusiones de amparo concertadas en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420.80.994000000181-1, **6)** disponibilidad del valor asegurado, **7)** carácter meramente indemnizatorio de los contratos de seguros, **8)** el pago por reembolso, **9)** la ausencia de solidaridad entre mi mandante y el Distrito Especial de Santiago de Cali; entre otras, en el remoto evento de que prosperen una o algunas de las pretensiones formuladas en la demanda en contra del asegurado.

1. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA AL NO REALIZARSE EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Es preciso informar al despacho, que en el presente caso no existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada respecto de la **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 420.80.994000000181-1**, por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado y amparado en el contrato de seguro.

En este sentido, el contrato de seguro solo entrará a operar sí y solo sí, el asegurado (Distrito de Santiago de Cali) es declarado patrimonialmente responsable por los presuntos daños que alega la parte demandante, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que impida los efectos jurídicos del contrato de seguro. Es así, como la declaratoria de responsabilidad civil constituirá el siniestro, esto es, la realización del riesgo asegurado (artículo 1072 del Código de Comercio).

En igual sentido se pactó el objeto de la póliza en los siguientes términos, veamos:

Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades,.

Al respecto, la parte demandante no ha demostrado los elementos constitutivos de la responsabilidad en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali, pues es claro que: i) no ha acreditado que la causa eficiente del accidente haya sido la supuesta omisión en el mantenimiento de la malla vial y/o la falta de señalización de ella, ii) como se ha explicado ampliamente a lo extenso

de este escrito, se presenta una evidente culpa exclusiva de la víctima que es quién conduce la bicicleta involucrada en el accidente, en claro desconocimiento de las normas de tránsito y que iii) genera un ineludible rompimiento del nexo de causalidad necesario para declarar la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada.

Por lo anterior, en razón a que no se ha demostrado la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali en la causación del daño y que, en todo caso, existe una causal de exoneración de la responsabilidad, solicito señor juez se declare probada esta excepción en cuanto no le asiste ninguna obligación a la compañía aseguradora, toda vez que no se ha realizado el riesgo asegurado.

2. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA

Sin que implique el reconocimiento de la responsabilidad, es necesario que el Juez observe las condiciones particulares y generales de la **Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 420.80.994000000181-1**, dado que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, que establece que el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 del mismo Código, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Para el caso concreto, el límite del valor asegurado pactado en la póliza para los casos de responsabilidad civil extracontractual respecto de predios, labores y operaciones es de \$7.000.000.000 pesos m/cte. Miremos:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	INVAR
PATRIMONIO DEL ASEGURADO		\$ 7,000,000,000.00	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	7,000,000,000.00	

Dicho valor de \$7.000.000.000 pesos m/cte, se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada, dado que la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que, es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de mi representada.

En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Por lo anterior, solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

3. LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE CIRCUNSCRIBE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONFORME AL COASEGURO PACTADO - INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD

Ahora, sin que lo siguiente implique la aceptación de la responsabilidad por parte de mi representada, es necesario precisar que, si llegaré a existir una condena en contra de la compañía aseguradora, el despacho debe tener en cuenta que los riesgos fueron distribuidos entre diferentes aseguradoras, así:

COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE COMPAÑIA	%PART
CHUBB SEGUROS COLOMBIA	28.00
SBS	20.00
COLPATRIA	10.00
HDI SEGUROS	10.00

En ese sentido, existiendo la distribución el riesgo entre las compañías de seguros, debe tenerse en cuenta que en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada a los porcentajes antes señalados, pues no se puede predicar solidaridad alguna entre ellas.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual sostiene: “en el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, **los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos,** siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad”.

Lo estipulado en la norma en cita, se aplica al coaseguro por estipulación expresa del artículo 1095 del Código de Comercio, que establece lo siguiente: “**las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro**”.

Es así como las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe solidaridad legal ni contractual entre ellas. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2021 con radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460) estableció:

(...) 18.1.- En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, **los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad** de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio: La jurisprudencia ha reconocido que en estos **casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente.** De hecho, ha indicado que en esos casos de coaseguro.²⁵ (Negrilla fuera del texto).

²⁵ Sentencia del 9 de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicación No. 08001-23-33-000- 2013-00227-01 (54460).

En consecuencia, al momento de resolver lo concerniente a mi procurada y en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar a su cargo, deberá tenerse en cuenta que la póliza de seguro antes referida fue tomada en coaseguro. En virtud de lo anterior, es claro que mi procurada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de estas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido.

Siendo así, resulta necesario aclarar que entre las coaseguradoras no existe solidaridad en la acreencia eventual por la pasiva, así lo ha entendido el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de enero del 2022, en la que afirmó:

Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas, de modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la vinculación del coasegurador Colpatría SA al trámite administrativo e imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud, carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control, con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo S.A. para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la comparecencia del coasegurador.²⁶

En virtud de lo anterior, solicito se tenga en cuenta el porcentaje del veinte por ciento (20%) asumido por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** respecto del contrato de seguro representado en la Póliza de Responsabilidad Civil No. **420-80-994000000181-1**.

4. LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 420-80-994000000181-1

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro”²⁷

²⁶ Sentencia del 26 de enero de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Freddy Ibarra Martínez. Radicación No. 25000232600020110122201 (50.698).

²⁷ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la **póliza de responsabilidad civil No. 420-80-994000000181-1 cuya vigencia corrió desde el 23 de junio de 2020 hasta el 19 de mayo 2021**, en su página 1 y siguientes señala la obligación de las partes de atender una serie de exclusiones contempladas en el clausulado general depositado por la aseguradora en la Superintendencia Financiera, tal como se ve a continuación:

12. Riesgos excluidos

En materia de riesgos excluidos el DISTRITO de Santiago de Cali acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso y la Exclusión por COVID-19. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

Ahora bien, dentro del contenido del documento en comento, entiéndase, el clausulado general, se encuentra la numerada como exclusión, la número “17” de la cláusula segunda, que reza lo siguiente: “**DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ÓRDENES IMPARTIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES**”. Por tal motivo solicito respetuosamente aplicar ésta última exclusión expresamente al caso concreto.

Por otro lado, si bien la Circular Básica Jurídica establece que las exclusiones deben constar en la primera página de la póliza y en caracteres destacados, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023 ha aclarado que lo necesario es que deban empezar en la primera página de la póliza, más no de su carátula, y en caracteres destacados para que tengan eficacia. Criterios que se cumplen dentro del proceso, pues las exclusiones se encuentran desde la primera página del condicionado en caracteres destacados de forma ininterrumpida. Lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

Artículo 184. Régimen de pólizas y tarifas. (...) 2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza. (Subrayado y negrillas fuera del texto original).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil mediante la Sentencia de Unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023, señaló que:

Ahora bien, con el propósito de aquilatar la hermenéutica de la norma en cuestión, debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1046 del Código de Comercio, se denomina póliza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta póliza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la carátula, en la que se consignan las condiciones particulares del artículo 1047 ibídem y las advertencias de mora establecidas en los cánones 1068 y 1152 del mismo Código; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los términos del artículo 1048 ejusdem. En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la carátula de la póliza de la

póliza misma, y que, dada esa distinción, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos básicos y las exclusiones, «en caracteres destacados» en la referida carátula. Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es a partir de allí donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado.

Conforme a lo anterior, las exclusiones son eficaces siempre que consten en caracteres destacados y comiencen a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza, tal y como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia; exigencia que se cumple en el caso de marras, toda vez que las exclusiones fueron estipuladas a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza.

Sobre la ubicación de las exclusiones pactadas en el instrumento asegurativo, en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

*1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros: Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información: 1.2.1.1. En la carátula: 1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co. 1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal. 1.2.1.2. **A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones) Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza.** Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

En ese sentido, la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de esta, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superfinanciera a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros), conceptuando lo siguiente:

Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en

consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse la exclusión arriba señalada o alguna de las exclusiones de las que constan en las condiciones generales y particulares de la **Póliza de Responsabilidad Civil No. 420-80-99400000181-1 cuya vigencia corrió desde el 23 de junio de 2020 hasta el 19 de mayo 2021**, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

En los anteriores términos, solicito señor juez declarar probada esta excepción.

5. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, al valor asegurado se le imputarán los pagos realizados por la aseguradora conforme a los siniestros extrajudiciales y judiciales, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos, la disponibilidad del valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

6. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Un principio que rige el contrato de seguro de daños es el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. Siendo así, la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Por lo anterior, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el beneficiario con el pago de la indemnización.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia No. 5065 del 22 de julio de 1999, estableció:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.²⁸

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio establece lo siguiente: **“respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”**. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Así las cosas, no debe perderse de vista que las pretensiones de la parte actora no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo un pago por parte del ente territorial que no tiene origen en una obligación legal o contractual.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciéndola.

En los anteriores términos solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

7. PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, se solicita al honorable operador judicial que, en el improbable caso de encontrar responsable al asegurado y de llegarse a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, la obligación de mi representada deberá imponerse por

²⁸ Sentencia No. 5065. (22 de julio de 1999). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Nicolás Bechara Simancas.

reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena. Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, sino por reembolso o reintegro.

8. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las mismas.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

9. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se encuentre originada en la ley o en el contrato de seguro expedido por mi procurada, incluida la de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 282 del Código General del Proceso que establece “(...) *Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes (...)*”.

En este sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción deberá declararse de manera oficiosa por el despacho en la sentencia que defina el mérito.

CAPÍTULO V. OPOSICIÓN PROBATORIA

1. INTERVENCIÓN EN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas en la demanda y en la

contestación a la demanda.

2. FRENTE A LA SOLICITUD DE OFICIAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

Me opongo a la solicitud probatoria relacionada a oficiar a la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali con el fin de obtenerse por parte de la parte actora (i) información y copia de los proyectos contractuales que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, (ii) copia de los estudios técnicos que la Secretaria de Infraestructura vial, haya elaborado durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, (iii) copia de los contratos para la recuperación de la malla vial que el Municipio de Santiago de Cali, haya desarrollado en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en razón a que a la parte demandante le asistía el deber de obtener ese documento a través del ejercicio del derecho de petición, de conformidad con el artículo 78, numeral 10 del Código General del Proceso, que expresa: “*son deberes de las partes y de sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que mediante el ejercicio del derecho de petición se pueden obtener*”.

Así mismo, en armonía con el artículo 173 del Código General del Proceso, referente a las oportunidades probatorias expresa que “*el juez se abstendrá de decretar las pruebas que directamente o que por medio de derecho de petición hubiere podido conseguir la parte quien la solicite, salvo que la petición no haya sido atendida, lo cual, deberá acreditarse sumariamente*”. En este caso, el actor dice:

Instamos al señor Juez de Conocimiento acceder al petitorio del citado recaudo documental, pues previamente se intentó su obtención por peticiones, tal como lo indica el artículo 173 del Código General del Proceso, exceptuando los documentos que ostentan reserva, según las previsiones de ley.

a. Al señor Gerente/ director de CLÍNICA COLOMBIA ubicada en la carrera 46 No. 9c-85 para que se sirva remitir con destino a este proceso: a. Fotocopia autentica de la totalidad de la historia clínica, con ocasión a la atención brindada en dicha dependencia desde el 04 de octubre del año dos mil veintidós (2022 hasta la fecha.

b. Expedir certificación en la que se indique los dineros cancelados en ocasión de la atención que le brindaron en dicho centro clínico.

Sin embargo, como del examen del expediente se advierte que la parte demandante manifiesta haber solicitado los documentos mediante derecho de petición, solicito que en caso de que ello sea lo ocurrido, se alleguen los mismos en la medida en la que se obtengan por los accionantes.

3. OPOSICIÓN A LA VALORACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES ALLEGADAS

Con fundamento en los lineamientos contenidos en las consideraciones de la Sentencia 05001233100020030399301 del 14 de febrero de 2018 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, me permito oponerme a la validez del contenido del material audiovisual (fotografías) que fue allegado por los demandantes en el líbello petitorio, toda vez que sobre el mismo no se logra identificar quién lo filmó y/o tomó, en dónde se

filmó y/o tomó, así como tampoco se puede asegurar su inalterabilidad, y dado que no obran en el expediente otros medios suasorios que soporten el contenido que aquí se objeta, el mismo no podrá ser utilizado como medio de convicción en el caso de marras.

De igual manera me opongo a que se atienda la solicitud de que se tenga como reconocimiento una publicación realizada por el señor Jorge Iván Ospina como alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali el 30 de marzo de 2022, toda vez que debe recordarse que él en su calidad de mandatario no tiene la facultad de confesar en contra de la entidad en ningún sentido, ello en virtud de lo contenido en el artículo 195 del Código General del Proceso.

4. FRENTE AL INTERROGATORIO DE GUSTAVO ADOLFO POSSO POPO

Me opongo a esta solicitud probatoria en el entendido de que la solicitud está encaminada a hacer comparecer en juicio en calidad de parte mediante interrogatorio de parte al señor Gustavo Adolfo Posso Popo, sin embargo, vemos de lo manifestado en el escrito de la demanda que el referido no acude a la litis en calidad de demandante así como tampoco de demandado, por ello la calidad en la que puede ser llamado a comparecer es mediante la figura de testimonio con las implicaciones procesales y probatorias que ello conlleva, motivo por el cual la solicitud resulta improcedente en los términos propuestos.

5. FRENTE A LA SOLICITUD DE TESTIMONIOS

Me opongo a esta solicitud probatoria en el entendido de que la solicitud está direccionada a que cada uno de ellos *“declare lo que le consta acerca de los hechos de la demanda y lo que pueda interesar al proceso por ser conocedor directo de los hechos, quien depondrá a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de los perjuicios causados”*, sin embargo, debemos atender lo ordenado por el artículo 212 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, así como lo manifestado por la jurisprudencia colombiana. En relación con los requisitos de la solicitud de la prueba testimonial, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC14026 de 2022 indicó:

*Pero ahora, atendiendo a que las partes acuden al proceso a confirmar sus versiones del conflicto, si pretenden aducir como prueba un testimonio, deben enunciar **“concretamente los hechos objeto de la prueba”**, es decir, **indicar de manera precisa, determinada y sin vaguedad los puntos fácticos del litigio sobre los cuales tiene conocimiento y podrá ser interrogado**. De esa manera se facilita la práctica del testimonio y su contradicción. El juez y las partes sabrán de antemano cuál será el tema de la declaración. Por su lado, quien no la pidió, al conocer con claridad su objeto, podrá preparar adecuadamente su contrainterrogatorio, a fin de desacreditar al testigo o su relato.” (...) Tal decisión se ajusta a derecho porque en efecto, al solicitar el decreto de los testimonios, el apoderado judicial de la parte demandante (...), en el escrito que recorrió el traslado de las excepciones, no indicó el domicilio, la residencia o lugar de ubicación de dichas personas ni mencionó los hechos objeto del medio de convicción, lo que denota un incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 212 del estatuto procesal. (...) En este orden de ideas, se evidencia que al limitarse a señalar el nombre de las personas que pretendía citar para rendir el testimonio, sin precisar los hechos objeto de prueba, ni el domicilio, residencia o lugar de ubicación de los declarantes el interesado incumplió los requisitos previstos en el artículo 212 del Código General del Proceso, de manera que el decreto del medio de*

convicción no procede, y se confirma la decisión apelada. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

En este sentido la ambigüedad y vaguedad con la que se describe el fin con el que acudirán a rendir testimonio las personas solicitadas, afecta de manera flagrante la posibilidad de las partes pasivas de la acción, de preparar una defensa técnica de manera correcta, lo que a su vez contraviene los preceptos del principio de buena fe y lealtad procesal, en tal sentido solicito se deniegue la práctica de los testimonios de:

- Bryan Pantoja Sierra
- Carlos Andres Cortes Timarán
- Anderson Burbano
- Jenny Lozano

Por haber sido solicitados en incumplimiento de los postulados normativos procesales relacionados al asunto en cuestión.

6. RATIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN LABORAL

Con base en lo contenido en el artículo 262 del Código General del Proceso me permito solicitar respetuosamente, que se realice por la parte accionante la ratificación de la constancia suscrita por la señora Alejandra Copete S. o como Jefe de talento Humano (o quien haga sus veces) de Cripack S.A.S., la cual ha sido allegada como medio probatorio acompañando el escrito de la demanda, dentro del presente asunto, solicitud que se realiza con miras a determinar la validez y autenticidad del documento y/o cualquier otro aspecto que pueda ser de utilidad para dirimir la controversia suscitada en este caso.

CAPÍTULO VI. PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000181 certificado 1.
2. Condicionado general No. 16/03/2018-1502-P-06-GENER-CL-SUSG-04-DROI Vr.3 06062017-1502-NT-P-06-P060617001009097.
3. Certificado de aceptación de coaseguro No. 1000253, expedido por **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva a los señores Daniela Ramírez Hurtado, Nolberto Andrés Bedoya Giraldo y Juan Esteban Bedoya Ramírez, con la intención de que den respuesta a un cuestionario que le formularé verbalmente en la diligencia, con relación a las situaciones de hecho que motivaron la presente demanda.

TESTIMONIALES

Solicito respetuosamente se sirva citar a la audiencia de pruebas respectiva al agente de tránsito

de placa No. 192, el señor Gustavo Adolfo Posso Popo, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 94.517.995, domiciliado en la ciudad de Cali, dirección de la Secretaria de Movilidad y Tránsito de Cali, que se ubica en la carrera 3 No. 56 - 30, Cali, Valle, correo electrónico: gustavo.posso@cali.gov.co quien puede ser citado a través del de la entidad, para que declare lo que le consta acerca de lo contenido en el Informe policial de accidente de tránsito No. A001113940 elaborado el 22 de enero de 2021, toda vez que el referido fue el agente de tránsito encargado de elaborar el informe en cuestión.

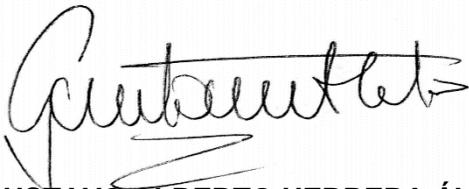
CAPÍTULO V. ANEXOS

1. Escritura Pública con poder general de representación a mí conferido.
2. Certificado de existencia y representación legal de mi representada expedido por la Cámara de Comercio de Cali.
3. Certificado de existencia expedido por la Superintendencia Financiera.
4. Documento de identidad y tarjeta profesional del suscrito apoderado.

CAPÍTULO VI. NOTIFICACIONES

Mi poderdante y el suscrito recibiremos notificaciones en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No.19.395.114 de Bogotá D.C.

T. P. No. 39.116 del C.S. J.